

C.A. de Santiago

Santiago, once de julio de dos mil veinticuatro.

A los folios N° 21, 22, 23 y 24: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparecen CLAUDIO FIERRO MORALES y SEBASTIÁN UNDURRAGA DEL RÍO, abogados de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Penal Pública, en representación de doña CECILIA BELÉN BILLORDO, requerida en procedimiento de extradición pasiva ROL 8557-2012, interponiendo recurso de amparo en contra de la resolución de 28 de mayo de 2024, pronunciada por la Ministra Instructora (S) Sra. María Eliana Quezada Muñoz en dicha causa, la cual rechazó un recurso de reposición interpuesto por esta defensa en contra de la resolución pronunciada por la misma Ministra Instructora (S) el día 24 de mayo de 2024 que, en el marco de una audiencia de cautela de garantías llevada a cabo el 23 de mayo de este año, desestimó las peticiones de la defensa *“en orden a librar un oficio a la cancillería para comunicar que existe factibilidad de realizar las audiencias seguidas ante el Tribunal Oral Penal Económico 1° del Poder Judicial de la Nación Argentina, a través del Poder Judicial de Chile.”*, y a la vez, *“dispone la reanudación del plazo para materializar la entrega de la requerida, la cual se deberá llevar a efecto en el término de 20 días contados desde la comunicación en tal sentido”*.

Indica que el 22 de enero de 2013, el ex Ministro Instructor de la Excma. Corte Suprema Sr. Pedro Pierry Arrau, accedió a la extradición pasiva formulada por la República de Argentina para que la amparada fuera juzgada por un delito de contrabando de estupefacientes, por hechos acaecidos en agosto y septiembre de 2011, siendo ésta entregada a Argentina en fecha indeterminada, pues no consta en expediente, entre fines de 2013 y principios de 2014, archivándose la causa el 12 de febrero de 2015.

Señala que se abrió nueva causa de extradición pasiva, ROL 28477-2018, pues la amparada volvió a Chile sin ser juzgada por el delito por el cual se extraditó.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXWXXZMFRS

Refiere que finalmente en esa causa se omitió pronunciamiento en relación a la nueva solicitud de extradición por ya existir un dictamen al respecto, y se sugirió instar a un nuevo cumplimiento en la causa anterior, lo cual así se hizo, ordenándose luego efectivamente el cumplimiento, pero difiriéndolo en diversas ocasiones por causas penales pendientes en Chile y embarazos de la amparada.

Agrega que, habiendo dado a luz el 16 de febrero de este año, se fijó el 16 de abril como fecha para fecha a partir de la cual se comenzará a computar el plazo de 40 días previsto por el artículo 11 de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, para efectos de materializar la entrega de la requerida.

Añade que el 13 de mayo de 2024 la defensa pidió audiencia de cautela de garantías y suspensión del plazo para la entrega, atendidas tratativas entre el ente persecutor argentino y la defensa de la amparada para llegar a una salida alternativa a la pena privativa de libertad. Da cuenta que Tribunal Oral Penal Económico 1 de Argentina, donde se lleva la causa motivo de la extradición, emitió oficio el 23 de abril de 2024 para el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino, con el juez penal competente de Chile con el fin de que preste asistencia a este Tribunal para llevar a cabo dos audiencias en forma telemática de modo de materializar la salida alternativa en negociación, oficio que el Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino no remitió a Chile dado que *“las autoridades chilenas competentes han manifestado formalmente la imposibilidad de realizar audiencias por videoconferencias con acusados o imputados en su territorio mediante el Oficio UCIEX N° 245 /2024 de 14 de febrero de 2024”*. En el escrito referido de la defensa, se pretende que el Monistro Instructor Arturo Prado Puga resuelva hacer o no lugar a la solicitud de materializar las audiencias por videoconferencia en el marco de la eventual solución colaborativa, pese a que no se ha remitido por la vía diplomática la solicitud referida del Tribunal argentino.

Indica que la audiencia se realizó el 23 de mayo, resolviendo el 24 del mismo mes la Ministra Instructora (S) Sra. Eliana Quezada Muñoz que *“se desestima la petición del abogado de la Defensoría Penal Pública, Sr. Sebastián Undurraga del Río en orden a librar un oficio a la cancillería para*



comunicar que existe factibilidad de realizar las audiencias seguidas ante el Tribunal Oral Penal Económico 1° del Poder Judicial de la Nación Argentina, a través del Poder Judicial de Chile.

Se dispone la reanudación del plazo para materializar la entrega de la requerida, la cual se deberá llevar a efecto en el término de 20 días contados desde la comunicación en tal sentido. Comuníquese a las autoridades del Estado requirente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.”

Señala que el 27 de mayo la defensa interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado el 28 del mismo mes.

Enuncia gestiones posteriores en la causa de extradición, señalando que, al menos hasta la fecha de interposición del recurso, la entrega de la amparada junto con su hijo lactante no se ha podido realizar por falta de documentación de identidad de ambos, poniendo estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, el 13 de junio la Ministra Instructora (S), con el fin de que realice los trámites necesarios para la entrega.

Alega que el rechazo de la solicitud de la defensa, así como el rechazo de la reposición de la decisión anterior, afectan la libertad personal de la amparada, vulneran la Ley N° 21.430 sobre Protección de la Infancia y el derecho a una vida libre de violencia, dado que, si bien el rechazo se basa en que el Estado Argentino ya comunicó que dispondrá de las medidas para que la amparada tenga un alojamiento con su hijo lactante en ese país, y que no corresponde al Ministro Instructor del proceso de extradición la coordinación de audiencias virtuales en el marco de un eventual procedimiento abreviado en el proceso penal argentino, lo que por lo demás no fue pedido por las autoridades respectivas, por la vía diplomática, la Ministra Instructora (S) no toma en cuenta, pese a que se alegó, 1) que la amparada tiene 3 hijos menores de edad más, de 10, 7 y 2 años, todos chilenos, los que quedarían institucionalizados si su madre deja el país, dado que el padre tiene cautelares que le impiden tener el cuidado personal, esto en el marco de causa proteccional, atendidos hechos de violencia intrafamiliar, y la falta absoluta de red de apoyo; 2) que si sale del país y se efectúa el procedimiento abreviado, la amparada no podrá volver a entrar por sus antecedentes, quedando sus 3 hijos mayores en desamparo; 3) que lo que la defensa en estricto rigor pide es “autorizar su comparecencia, en presencia



(telemática) de un ministro de fe de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema que certifique la identidad de la señora Billordo”, encargándose la Defensoría Penal Pública Chilena y la Defensa Pública Oficial Argentina de la coordinación de la audiencia; y 4) que hay jurisprudencia de la Corte Suprema en el sentido de que los tribunales de justicia pueden adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió, incluso cuando no haya precepto legal que lo autorice expresamente.

Pide:

1. Despachar oficio a la Cancillería para comunicar que existe factibilidad de realizar dos audiencias telemáticas para que la requerida acepte un juicio abreviado en Argentina, contando con la presencia de un ministro de fe de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (o de la Cancillería o de INTERPOL Chile) que pueda certificar la identidad de la requerida y cuya coordinación será efectuada por la Defensoría Penal Pública (o por quien esta Corte disponga), para efecto de que la Cancillería despache una nota diplomática dirigida al tribunal penal competente en Argentina y se puedan coordinar las audiencias que ese mismo tribunal originalmente solicitó.

2. Se suspenda la entrega de la requerida a la República Argentina, mientras no se haya pronunciado una resolución firme que otorgue una solución acerca de la situación en que quedarán los hijos chilenos de la amparada en caso de procederse a la entrega de su madre.

Segundo: Que el ministro ARTURO PRADO PUGA, instructor de la causa sobre extradición pasiva Rol N° 8.557-2012, evacuó informe.

Sostiene que lo solicitado escapa del fin del procedimiento de extradición pasiva.

Afirma que la solicitud impetrada por la defensa se enmarca en un procedimiento de asistencia mutua en materia penal, la cual tiene por finalidad coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles, materia cuya competencia ha sido entregada al Ministerio Público en su calidad de autoridad central según prescribe el artículo 20 bis del Código Procesal Penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXWXXZMFRS

Indica, en cuanto a los hijos de la requerida que quedarán en Chile, que se trata de una materia propia del tribunal de familia correspondiente.

Tercero: Que, el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar de índole constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a privaciones de libertad ambulatoria, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, frente a amenazas ilegales al ejercicio de dicha libertad y frente a privaciones, perturbaciones o amenazas a la seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de tales atentados.

Cuarto: Que en el presente caso, no es controvertido que la resolución que se impugna ha sido dictada por tribunal competente para ello y en uso de sus facultades legales.

Quinto: Que, por el contrario, la recurrente no niega que el Tribunal recurrido no tiene facultades legales para acceder a la solicitud relativa a la comunicación al Estado Argentino de la factibilidad de realizar las audiencias telemáticas en el marco de un eventual procedimiento abreviado en la causa penal llevada en dicho estado contra la amparada, sino que, por el contrario, reconociéndolo expresamente, sostiene que la ministra instructora debía ejercer facultades extra legales.

Sexto: Que el procedimiento de extradición tiene como fin determinar la concurrencia de ciertos requisitos previstos por el legislador para que se dé inicio a un proceso judicial en el Estado requirente, o se haga cumplir una sentencia condenatoria ejecutoriada en el país que motiva el requerimiento, para así evitar la impunidad por la comisión de conductas ilícitas graves y comúnmente sancionadas por la comunidad internacional, por haberse refugiado el requerido en el territorio jurisdiccional de otro estado.

Séptimo: Que la solicitud tendiente a la colaboración del Poder Judicial con la realización de audiencias telemáticas en el marco de un proceso penal extranjero escapa a toda competencia del ministro instructor en una causa de extradición pasiva, caracterizada en el considerando anterior, máxime cuando no es un hecho discutido que dicha solicitud, efectuada primeramente por el Tribunal Oral Penal Económico 1 de Argentina, no fue tramitada diplomáticamente por el Estado Argentino, y posteriormente no fue reiterada por el Tribunal referido, quien, ha arbitrado las medidas para que el traslado



de la amparada y su hijo lactante a dicho país pueda realizarse en las condiciones apropiadas, y también para la residencia de ambos en Argentina.

Por lo demás, cierto es que la competencia para la asistencia mutua en materia penal, cuya finalidad es coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles, es una materia entregada al Ministerio Público en su calidad de autoridad central, por el artículo 20 bis del Código Procesal Penal.

Octavo: Que, por otro lado, proponer la realización de audiencias telemáticas en el marco de un procedimiento penal extranjero, cuando el Estado correspondiente no ha efectuado la solicitud correspondiente, correspondería a una inmiscusión del Tribunal recurrido en la jurisdicción extranjera.

Noveno: Que, atendido que el recurso de amparo se interpone en representación de la recurrida, los argumentos relativos a los derechos de sus hijos no resultan conducentes, los cuales, por lo demás, corresponde que sean resguardados en el procedimiento de familia competente, y no en un procedimiento de extradición pasiva.

Décimo: Que, por lo demás, no se aprecia cómo el derecho a la libertad personal de la amparada puede verse afectado de manera ilegal, en tanto existe una sentencia firme de extradición pasiva que ordenó su entrega al Estado argentino, lo cual no queda más que cumplir.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas, en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, y en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza** el recurso de amparo deducido en favor de CECILIA BELÉN BILLORDO.

Regístrese y comuníquese.

Nº Amparo-1807-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXWXXZMFRS



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXWXXZMFRS

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Mario Rojas G. y Abogado Integrante Waldo Leonidas Parra P. Santiago, once de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a once de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXWXXZMFRS